

AULA MAGNA
CRECIMIENTO
Y DESIGUALDAD:
CONFLICTO
SOCIAL Y
GOBERNABILIDAD

Capítulo 6

EFRAÍN GONZALES DE OLARTE
EDITOR



**AULA
MAGNA**



**FONDO
EDITORIAL**

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

Aula Magna

Crecimiento y desigualdad: conflicto social y gobernabilidad

Efraín Gonzales de Olarte, editor

© Efraín Gonzales de Olarte

De esta edición:

© Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2011

Av. Universitaria 1801, Lima 32, Perú

Teléfono: (51 1) 626-2650

Fax: (51 1) 626-2913

feditor@pucp.edu.pe

www.pucp.edu.pe/publicaciones

Diseño, diagramación, corrección de estilo

y cuidado de la edición: Fondo Editorial PUCP

Primera edición: noviembre de 2011

Tiraje: 500 ejemplares

Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio,
total o parcialmente, sin permiso expreso de los editores.

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2011-13754

ISBN: 978-9972-42-976-7

Registro del Proyecto Editorial: 31501361101836

Impreso en Tarea Asociación Gráfica Educativa

Pasaje María Auxiliadora 156, Lima 5, Perú

Conflictos bélicos en el siglo XXI

Farid Kahhat

Hace aproximadamente un año, un ex canciller del gobierno de Alberto Fujimori sostuvo en una entrevista televisiva literalmente lo siguiente: «Las guerras desde el final de la Guerra Fría hasta hoy han aumentado en el mundo, no han disminuido: hemos sido testigos de muchos más conflictos». ¿Cuán ciertas son esas afirmaciones?

En la literatura académica se establece un umbral convencional en materia de definiciones: un conflicto armado solo califica como una guerra cuando los combates producen al menos mil muertes por año. Bajo ese criterio, la primera afirmación («Las guerras desde el final de la Guerra Fría hasta hoy han aumentado en el mundo»), es absolutamente falsa; la segunda, en cambio («hemos sido testigos de muchos más conflictos»), es verdad solo en parte, y solo para el periodo comprendido entre 2003 y 2008.

Si nos basamos en la información disponible en internet (por ejemplo, los *Human Security Report* de los años que median entre 2005 y 2010¹ y el artículo «Best Decade Ever», de Kenny 2010, entre otros

¹ <http://www.hsrgroup.org/human-security-reports/human-security-report.aspx>

documentos), podemos afirmar que el número de conflictos armados de todo tipo disminuyó en el mundo desde el final de la Guerra Fría hasta el año 2005: el número de conflictos armados en general se redujo en un 40% entre 1990 y 2005, el número de guerras interestatales se redujo en un 80% entre 1990 y 2005, y el número de guerras civiles se redujo en un 75% entre 1992 (año hasta el cual continuó creciendo) y 2005.

Entre 2005 y el presente, el número de guerras civiles continuó en declive, y no hubo ninguna guerra entre Estados entre 2003 y 2010 (el conflicto armado entre Georgia y Rusia, por ejemplo, no alcanzó el umbral crítico de las mil muertes en combate). Puesto el asunto en perspectiva, las guerras de cualquier tipo disminuyeron en un 78% entre 1988 y 2010. Es cierto, sin embargo, que tras disminuir por más de una década, el número de conflictos armados creció en un 25% entre 2003 y 2008, pero ello se explica en lo esencial por el incremento (de más de 100% entre 2007 y 2008) de conflictos armados entre grupos privados (es decir, conflictos que no involucran como contendiente a un gobierno). Pero esos conflictos rara vez trascienden el año de duración, y las bajas que provocan representan una cifra pequeña en comparación con las causadas por los conflictos armados que involucran al menos a un gobierno.

Por ello, entre los años 2000 y 2008, las bajas en combate cayeron en un 40% en el mundo. En el África subsahariana, por ejemplo, el número de bajas en combate se redujo de 46 000 durante el año 2000 a 6000 durante 2008.

Todo lo anterior contribuye a explicar la disminución en los niveles de gasto de defensa como porcentaje del producto global: según Kenny, en la actualidad esa proporción representa aproximadamente la mitad de su nivel de 1990. En la última década, sin embargo, esa tendencia se ha revertido tanto en Estados Unidos como en algunos países de Sudamérica. Pero cabría recordar que, a diferencia de Estados Unidos, históricamente los países sudamericanos han mantenido niveles relativamente bajos de gasto en defensa como proporción del

producto, en comparación con otras regiones del mundo. Por lo demás, en Sudamérica unos dos tercios del presupuesto para el sector defensa se destinan al gasto corriente, no a la compra de armamento.

Podríamos concluir añadiendo que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial no hemos tenido un solo caso del tipo de guerra más mortífera que haya experimentado jamás el sistema internacional contemporáneo: las guerras entre grandes potencias militares. Se trata del periodo más prolongado de paz entre grandes potencias militares en más de quinientos años.

La única excepción a lo dicho es que el terrorismo en general —y una forma específica de acción terrorista en particular, los atentados suicidas— creció significativamente durante los primeros años del nuevo siglo. Según la base de datos de la Universidad de Maryland sobre la materia, el número de víctimas mortales como consecuencia de acciones terroristas se había venido reduciendo en el mundo hasta antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Tras dichos atentados, esa cifra volvió a descender hasta 2003, año en el que se inició un crecimiento dramático: de unas 2000 muertes por terrorismo en 2003, pasamos a unas 12 000 víctimas mortales por terrorismo en 2006. Ese incremento, a su vez, es correlativo al incremento de atentados suicidas, los cuales representan menos del 5% del total de acciones terroristas, pero dan cuenta de cerca de la mitad del total de las víctimas mortales que estas provocan.

Cabría, sin embargo, formular algunas atingencias. La primera es que el 80% del total de atentados suicidas en el mundo entre 2003 y 2008 tuvieron lugar en tan solo dos países: Afganistán e Iraq (Fareed, 2008, p. 5). Es decir, aquellos países que Estados Unidos invadió y ocupó después del 11 de septiembre de 2001. Este dato coincide con el hallazgo obtenido por un estudio reciente llevado a cabo por Robert Pape, al frente de un equipo de investigadores de la Universidad de Chicago que ha producido la mayor base de datos sobre terrorismo suicida. Ese estudio concluye que «más del 95% de todos los ataques

suicidas son en respuesta a la ocupación extranjera». Como prueba de ello, el texto añade que «Entre 1980 y 2003 hubo 343 ataques suicidas alrededor del mundo, y a lo sumo un 10% de ellos tenían inspiración antiestadounidense. Desde 2004 se han producido más de 2000, y más de 91% iban dirigidos contra los Estados Unidos y fuerzas aliadas en Afganistán, Iraq y otros países» (Pape, 2010).

Ahora bien, en cuanto a la pregunta de por qué hay menos guerras y menos muertes por guerra en el mundo en años recientes, no existe una respuesta clara e inequívoca, pero sí varias respuestas probables. La primera es el significativo incremento en el número de Misiones de Paz de Naciones Unidas: allí donde estas se despliegan, o bien cesa eventualmente la violencia política, o cuanto menos disminuye de manera significativa. Ello contrasta con la menor eficacia relativa de Naciones Unidas cuando se trata de reconstruir la infraestructura y las instituciones de un país, lo que resulta significativo si se considera que, según algunos cálculos, el costo promedio de una guerra civil fluctúa entre 60 000 y 250 000 millones de dólares. Según esos mismos cálculos, una inversión de 8500 millones de dólares en misiones de paz durante una década reduce en un 30% la probabilidad de que ocurran guerras civiles, lo cual provoca un ahorro de entre 18 000 y 75 000 millones de dólares.

Existen también dos estudios de la Corporación Rand (creada por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos) que comparan las intervenciones militares de Naciones Unidas con aquellas que lideran los Estados Unidos. Estos encontraron que, de ocho intervenciones militares lideradas por las Naciones Unidas, en siete se había logrado una paz sostenida, mientras que de ocho intervenciones militares lideradas por los Estados Unidos, solo en cuatro se había conseguido dicho objetivo. La conclusión es interesante, en especial si se toma en cuenta que el costo anual de todas las misiones de paz de Naciones Unidas durante 2005 fue menor que el costo mensual de la ocupación estadounidense en Iraq.

Otra razón por la que podría haberse reducido la incidencia de las guerras en el mundo es la disminución de la pobreza en el planeta.

Pero no nos referimos a la proporción de la población en situación de pobreza, sino a cuán pobre es en general un determinado país, medido por el nivel de su ingreso per cápita. La probabilidad de guerra civil en un país en los siguientes cinco años se triplica si el ingreso per cápita del país en cuestión es menor a los 1000 dólares anuales. Según algunas fuentes, la mitad de la población mundial vivía con un dólar o menos al día en 1990. Esa proporción se había reducido a 28% en el año 2007. En el África subsahariana, por ejemplo (una región que creció por encima del promedio mundial durante la década pasada), murieron en combate 46 000 personas durante el año 2000. Esa cifra se había reducido a 6000 durante el año 2008. Contra lo que podría pensarse, la desigualdad en la distribución del ingreso no está fuertemente asociada con la probabilidad de guerra civil, pero sí hace que cuando una guerra civil se inicia, esta sea más prolongada. La desigualdad en la distribución del ingreso, más que a la violencia política, parece estar asociada a la violencia delincencial. Eso ayudaría a explicar por qué América Latina tiene simultáneamente tanto los niveles de desigualdad (medidos por coeficiente Gini) como las tasas de homicidio más elevadas del mundo.

Un tercer factor que parece ayudar a explicar la reducción en las guerras es el cambio de regímenes políticos. Al margen de las explicaciones que pueda ofrecerse para ellas, existen ciertas regularidades empíricas sobre la relación entre régimen político y violencia política: los regímenes autoritarios padecen menos guerras civiles que el promedio. Los regímenes democráticos también padecen menos guerras civiles que el promedio, pero además no suelen librar guerras entre sí. Pero si consideramos el régimen político como una variable continua, son los regímenes políticos que caen en alguna categoría intermedia entre los polos (que algunos autores denominan «anocracias») los más proclives a padecer guerras civiles. Pues bien, el número de regímenes autoritarios ha descendido en las últimas décadas, y el número de anocracias se ha mantenido relativamente constante, mientras el número de democracias representativas se ha incrementado. Sobre esto habría que recordar

que jamás una insurgencia marxista derrocó a un gobierno democráticamente elegido y que los cuatro gobiernos derrocados por revoluciones sociales en América Latina durante el siglo XX fueron autoritarios: México en 1910, Bolivia en 1952, Cuba en 1959 y Nicaragua en 1979.

Pasando ahora del panorama mundial al hemisferio occidental, hay varios factores que ayudan a explicar por qué América Latina y el Caribe ha sido históricamente una región que, comparada con el resto del mundo, ha tenido pocas guerras interestatales. Uno es la sombra que los Estados Unidos proyectan sobre la región: la presencia de los Estados Unidos redujo la injerencia de potencias extra hemisféricas (fundamentalmente europeas) en América Latina y el Caribe. Prevenir esa injerencia fue una política oficial de los Estados Unidos desde la denominada «Doctrina Monroe» (resumida habitualmente en la expresión «América para los americanos»), que definía al hemisferio occidental como un área de influencia estadounidense. Durante la Guerra Fría la política de contención cumplió una función similar, solo que ya no contra las viejas potencias coloniales de Europa, sino contra la Unión Soviética.

Existen, sin embargo, dos razones adicionales por las que la injerencia militar de las potencias europeas en América Latina y el Caribe fue relativamente escasa. Por un lado, el eje de la política internacional entre los siglos XVII y XX giró en torno a Europa. Parafraseando a Halford Mackinder, solía pensarse que quien controlaba Europa del Este controlaba Europa, quien controlaba Europa controlaba Eurasia, y quien controlaba Eurasia controlaba el mundo. América Latina y el Caribe no solo está lejos de Eurasia (lugar donde se definía la distribución de poder global), sino que además esa región del mundo no contenía (ni contiene) ninguna potencia militar mundial de primer orden.

Ahora, si dividimos el hemisferio americano en partes, habría que tener en cuenta que no toda la región es igualmente importante para Estados Unidos, y contra lo que podría creerse, Sudamérica no es particularmente relevante. Más significativa para Estados Unidos es la subregión formada por México, Centroamérica y el Caribe. En primer

lugar, la mitad de la inversión de empresas estadounidenses en América Latina y el Caribe se destina a México, Centroamérica y el Caribe, lo cual es particularmente relevante si tenemos en consideración que se trata de una subregión bastante más pequeña que Sudamérica en lo que respecta al tamaño de su economía.

En segundo lugar, el 70% del comercio de Estados Unidos con América Latina y el Caribe se dirige a esa subregión, donde México ocupa un papel destacado. En sentido estricto, México no tiene comercio exterior: tiene comercio bilateral con Estados Unidos (comercio bilateral que da cuenta de más del 80% del comercio de México con el resto del mundo).

En tercer lugar, el 85% de los inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos procede de México, Centroamérica y el Caribe. Es por ello que en ese país hay más votantes de origen salvadoreño que de origen brasileño.

La cuarta razón por la que México, Centroamérica y el Caribe tienen mayor relevancia que Sudamérica para los Estados Unidos es su proximidad geográfica. De hecho, el único país de América Latina que tiene una frontera territorial con Estados Unidos es México, y esta se extiende a lo largo de 3100 km. La crisis de los misiles entre Estados Unidos y la Unión Soviética fue por misiles instalados por la Unión Soviética en Cuba, es decir, en el Caribe, a 90 millas de las costas estadounidenses. Por último, Centroamérica y el Caribe son más vulnerables a la injerencia de potencias extra hemisféricas, y por eso solía considerárseles el «blando bajo vientre» de Estados Unidos.

Todas esas razones ayudan a entender por qué todas las intervenciones militares de Estados Unidos en América Latina y el Caribe fueron en México, Centroamérica y el Caribe. Jamás hubo una intervención militar estadounidense en Sudamérica. Lo anterior también ayuda a explicar por qué algunos países centroamericanos adecuan su política exterior y su política de seguridad a esa percepción de debilidad relativa en el sistema internacional. Asumiendo que tienen escasa capacidad de maniobra como

actores autónomos en el sistema internacional, apuestan por una relación cada vez más cercana con Estados Unidos o, en palabras del ex presidente argentino Carlos Menem, una «relación carnal» con ese país. Esto se refleja incluso en su política exterior hacia otras regiones del mundo. Por ejemplo, la mayoría de los gobiernos de Centroamérica y el Caribe apoyó la invasión y ocupación de Iraq en 2003, y cuatro de ellos enviaron tropas. En Sudamérica, en cambio, solo el gobierno colombiano declaró su apoyo a la guerra de Iraq, pero no envió tropas.

En general, asumir la falta de autonomía en la escena internacional como una condición estructural lleva a priorizar los intereses materiales de corto y mediano plazo como fundamento de la política exterior. Y no solo en la relación con Estados Unidos: también puede apreciarse en la conducta hacia otras regiones del mundo; por ejemplo, en la relación con China y Taiwán. La República Popular China no considera a Taiwán un Estado independiente sino una «provincia rebelde», y no mantiene relaciones diplomáticas con Estados que, a su vez, concedan un reconocimiento diplomático a Taiwán. Por eso solo hay veintidós Estados en el mundo que reconocen a Taiwán. De ellos, once son Estados de América Latina y el Caribe, pero solo uno proviene de Sudamérica (Paraguay); los otros diez Estados son de Centroamérica y el Caribe.

En síntesis, Sudamérica es una realidad distinta del resto de la región latinoamericana en más de un aspecto, y sobre todo desde la perspectiva estadounidense. Sudamérica ha tenido muy pocas guerras en el siglo XX: las guerras entre Perú y Ecuador, la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, y la Guerra de Las Malvinas. Básicamente esas son las únicas guerras en toda Sudamérica durante el siglo XX, y una de ellas fue con una potencia extra hemisférica y no fue en el territorio continental de América Latina (la Guerra de las Malvinas). Sin embargo, la ausencia de guerras interestatales en América Latina no implica que no se haya producido una proporción considerable de violencia política dentro de los Estados de la región. La pregunta sería entonces por qué se produce esa situación paradójal.

La perspectiva realista dentro de la literatura en relaciones internacionales identifica varios factores que inciden sobre la probabilidad de conflicto armado entre Estados. La intención hostil suele ser una condición necesaria, pero no suficiente para ello. El inicio de un conflicto armado suele depender, además, de la presencia de otras variables. Desde la perspectiva en mención, esas variables son: la distribución de poderío militar entre los Estados, la proximidad geográfica, la existencia de amplias zonas rurales de baja densidad demográfica y con un terreno accidentado, y la existencia de capacidad ofensiva en el plano militar.

Si se observa a Sudamérica a partir de esas variables, podría entenderse por qué hay una escasa incidencia de guerras entre Estados dentro de esa región. La literatura sobre geopolítica solía considerar Colombia, Venezuela y las Guayanas como parte del espacio geopolítico caribeño, y al referirse al resto de Sudamérica, lo hacía bajo la denominación de «Cono Sur». Dentro del Cono Sur así definido, los cuatro Estados de mayor poderío militar son Argentina, Brasil, Chile y Perú. En ese contexto, uno comienza a entender la noción según la cual Bolivia constituye el corazón geopolítico de Sudamérica: si sustraen imaginariamente a Bolivia del mapa sudamericano, lo que tendrían probablemente es que los cuatro países antes mencionados tendrían todos fronteras entre sí. La existencia de Bolivia (como proverbial «Estado tapón», en el léxico geopolítico) es lo que impide esa posibilidad. Así, a criterio de diversos autores, lo que tenemos entre esos cuatro Estados son alianzas informales entre pares de Estados que no tienen fronteras entre sí, pero comparten fronteras con los otros dos (Argentina y Perú, por un lado, y Brasil y Chile, por otro). La Guerra de las Malvinas en 1982 fue un momento en el cual esa presunción se hizo realidad: mientras el gobierno peruano de la época envió pilotos y aviones de combate hacia la Argentina, ahora sabemos que el gobierno de Chile (según versión tanto de la ex Premier británica Margaret Thatcher como del ex miembro de la junta de gobierno de Chile, Fernando Matthei) ofreció un respaldo soterrado pero activo a Gran Bretaña.

En cuanto a la proximidad geográfica como fuente potencial de conflictos armados, cabría recordar que, pese a lo que sugiere el mapa-mundi de Mercator que empleamos aun hoy en día, América del Sur es una región de dimensiones continentales. Por solo citar un ejemplo, el Perú tiene una extensión territorial que es más o menos similar al territorio combinado de Alemania, Francia e Inglaterra (es decir, las tres principales potencias de la Unión Europea). Eso hace que, por ejemplo, las distancias entre las capitales de los Estados de la región sean sumamente grandes.

En cuanto a la existencia de zonas rurales de baja densidad demográfica con terreno extenso y accidentado como obstáculo que dificulta los conflictos bélicos interestatales, esa es una condición que también está presente en Sudamérica. Por ejemplo, entre Brasilia y Lima (capitales de Brasil y Perú, respectivamente), no solamente existe una distancia de miles de kilómetros, sino que se interponen además la selva amazónica y la cordillera de los Andes. Es decir, no estamos hablando de países como Alemania, pequeños, relativamente planos, y que en algunos periodos de su historia contó, además, con la presencia de potencias hostiles tanto hacia el este como hacia el oeste de su territorio. A todo ello habría que añadir que, en muchos casos, las zonas de frontera tienen una baja densidad demográfica (en algunas zonas de las fronteras amazónicas, por ejemplo, esta es de menos de un habitante por kilómetro cuadrado).

La paradoja que implica un territorio vasto y accidentado, sin embargo, es que, al mismo tiempo que hace menos probable una guerra entre Estados, hace más probable el surgimiento de violencia política dentro de un Estado. No es casual que las columnas supérstites de Sendero Luminoso en el Perú se ubiquen en territorios como el valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE): se trata de un espacio geográfico en el que se encuentran la cordillera de los Andes y la selva amazónica. Es decir, es un territorio a la vez montañoso y boscoso, lo cual lo convierte en difícil de conquistar por medios convencionales (en tanto

favorece la defensa sobre el ataque), pero hace más factibles las guerras civiles o el surgimiento de insurgencias, porque es un tipo de terreno que provee de lugares donde ocultarse a grupos irregulares armados.

La capacidad militar ofensiva fue la cuarta variable esgrimida para explicar la probabilidad de conflicto armado entre Estados. Se refiere específicamente a la idea de que hay capacidades militares que cumplen en lo esencial una función defensiva (como, por ejemplo, el armamento antiaéreo), y otras que podrían servir más bien a propósitos de ataque (como, por ejemplo, los bombarderos). Diversas fuentes concuerdan en que el gasto de defensa en Sudamérica ha crecido dramáticamente durante la primera década del siglo XXI; sin embargo, como se indicó con anterioridad, dos tercios del presupuesto de defensa en América Latina se destinan a gastos corrientes (en lo esencial, sueldos, salarios y pensiones). Además, el gasto de defensa en la mayoría de casos no ha crecido como proporción del producto sino que ha seguido el mismo ritmo que las economías de la región.

Por lo demás, el incremento del gasto en defensa no se produce en todos los Estados por igual. Son básicamente cuatro Estados de Sudamérica los que dan cuenta de la mayor parte de ese crecimiento: Brasil, Colombia, Chile, y Venezuela. Aun así, la capacidad ofensiva de la mayoría de Estados de la región es relativamente limitada. Por ejemplo, dos medios para superar los obstáculos que imponen las grandes distancias y la geografía accidentada son los misiles de mediano alcance y una aviación tecnológicamente sofisticada: ambos están en lo esencial ausentes en el contexto sudamericano. Tampoco habría arsenales de armas químicas y biológicas, y el Tratado de Tlatelolco convierte a América Latina en un área libre de armas nucleares.

Ahora bien, lo que podría ser preocupante del incremento en el gasto de defensa en Sudamérica es el tipo de adquisiciones militares que hacen algunos Estados, y las alianzas militares que podrían ir asociadas a esas adquisiciones. En primer lugar, se están comprando aviones de combate con un importante potencial ofensivo. Esto incluye la

adquisición a Francia de aviones de combate Rafale por Brasil, la adquisición tanto a Estados Unidos como a Holanda de aviones F16 por Chile, y la adquisición de aviones Sukoi 30 a Rusia por Venezuela. Pero la compra de armamento no es equivalente a otras importaciones. En primer lugar, suele involucrar convenios entre Estados y no solo entre empresas privadas, porque habitualmente el vendedor se compromete a proveer, además, repuestos, mantenimiento, asesoría técnica, servicios de repotenciación, e incluso transferencia de tecnología, por lo que establece un vínculo de largo aliento entre las partes. Por esa razón las recientes adquisiciones han ido de la mano de alianzas con actores extra regionales (Venezuela y Rusia, Brasil y Francia), además de una presencia creciente de Estados Unidos en Sudamérica (a través de la operación de bases aéreas en territorio colombiano, o la reactivación de la cuarta flota de la marina de guerra de los Estados Unidos después de 58 años).

En cuanto a la existencia de relaciones conflictivas entre Estados de la región, cabría recordar que las tensiones entre Colombia y Venezuela no comenzaron con la llegada al gobierno de Hugo Chávez. Existe un diferendo limítrofe de larga data entre ambos Estados que ya en las décadas de 1980 y 1990 había provocado la movilización de tropas hacia la frontera común (en la década de 1980 esta estuvo asociada a una breve carrera armamentista en ambas partes). Ello no implica, sin embargo, que el propósito de las bases bajo administración estadounidense en Colombia sea el de lanzar un ataque contra Venezuela. En primer lugar, porque el acuerdo limita a ochocientos el número de soldados y a seiscientos el número de contratistas de seguridad privados que pueden estar en un momento dado en territorio colombiano. Por sus dimensiones, no se trata, pues, de una fuerza de invasión. En segundo lugar, el acuerdo no permite el uso de esas bases para aviones de guerra: solo pueden aterrizar y despegar de ellas aviones de carga o de inteligencia. De cualquier modo, la mayor parte del petróleo que exporta Venezuela se destina al mercado estadounidense, así que no queda claro por qué los Estados Unidos tendrían interés en atacar a Venezuela para apoderarse

de un recurso que obtienen hoy en día por vía comercial sin mayor dificultad (aunque, según el gobierno venezolano, esa sería la razón por la que Estados Unidos buscaría una eventual agresión).

Dicho esto, sin embargo, habría que añadir que las bases en Colombia sí tienen como propósito monitorear las acciones de las FARC, y que tanto Colombia como los Estados Unidos alegan que las FARC operan en territorio venezolano. Luego, los aviones de inteligencia AWACS podrían monitorear lo que ocurre en Venezuela con ese argumento. No en vano una de las bases desde las que operan aviones estadounidenses en Colombia se encuentra en la región de La Guajira, muy cerca de la frontera con Venezuela. Además, la presencia militar de los Estados Unidos en las inmediaciones de Venezuela no se limita a las bases en Colombia. Hay bases estadounidenses en Aruba y Curazao, a corta distancia de la costa caribeña de Venezuela, y Estados Unidos ha reactivado después de más de medio siglo la Cuarta Flota de su marina de guerra, que operaría en o cerca del Caribe latinoamericano. En otras palabras, hay presencia militar estadounidense al este, oeste y norte de Venezuela. ¿Cuál sería, entonces, su propósito? Creo que es doble: vigilancia y disuasión.

Ahora bien, aunque en mi opinión es improbable que cualquiera de las dos partes tenga una intención hostil, también es cierto que estamos hablando de una frontera sumamente porosa, que atraviesan de forma cotidiana narcotraficantes, grupos irregulares armados, contrabandistas, etcétera. Siempre cabe, por ende, la posibilidad de que una escaramuza por una persecución en caliente (como la que alegó falsamente Colombia que existía cuando atacó un blanco de las FARC en territorio ecuatoriano), podría hipotéticamente conducir a una escalada.

En cuanto a las relaciones de seguridad entre Chile y el Perú, la pregunta que tendrían que responder quienes postulan la existencia de una hipótesis verosímil de conflicto armado entre ambos Estados sería la siguiente: ¿qué fines políticos conseguiría Chile por medios militares que no pueda conseguir, a menor costo, por otros medios? La hipótesis

de conflicto más socorrida es la que sostiene que, dado que Chile carece en general de fuentes de energía y el norte de ese país carece de agua dulce, y ambos recursos existen en relativa abundancia tanto en Bolivia como en el Perú, el objetivo militar sería una ocupación de largo plazo para apoderarse de ellos.

Esa hipótesis, sin embargo, deja varias preguntas claves sin respuesta. La primera es: ¿por qué Chile atacaría a sus vecinos para acceder a recursos que puede obtener a través del comercio a un costo sensiblemente menor (por ejemplo, importando gas de Indonesia como de hecho hace en este momento)? Dicho sea de paso, las importaciones de energía de Chile equivalen aproximadamente a la sexta parte de sus exportaciones y a la cuarta parte de su superávit comercial. Es decir, no estamos ante una situación particularmente dramática. El Estado chileno probablemente preferiría tener fuentes de suministro más seguras y cercanas, pero si carece de ellas no se va a paralizar su economía.

En todo caso, ¿por qué atacar al Perú, con un poderío militar superior al de Bolivia, cuando este último tiene fuentes de agua —y, sobre todo, de gas— más importantes que aquellas con las que cuenta el Perú? De cualquier modo, de producirse una intervención militar en el Perú para apropiarse de esos recursos, ¿cómo haría llegar Chile el gas a su propio territorio a un costo razonable? Cabría recordar que la principal potencia militar del mundo, Estados Unidos, no pudo impedir en un territorio relativamente plano y desértico como el de Iraq un sabotaje constante a los oleoductos y gasoductos de ese país. En el caso del gas de Camisea, un gasoducto tendría que atravesar cientos de kilómetros en ceja de selva, cordillera andina y costa antes de llegar a Chile. Por último, si Chile tiene planes bélicos con el propósito de apropiarse de recursos naturales, ¿por qué no actuó sobre esa base en esos planes cuando las circunstancias fueron más propicias? Por ejemplo, en 1995, cuando las Fuerzas Armadas peruanas estaban engarzadas en un conflicto armado con el Ecuador, o entre 1982 y 1992, cuando estaban involucradas en la guerra contrasubversiva.

Tampoco creo que haya una hipótesis de conflicto verosímil en torno al diferendo limítrofe entre Chile y el Perú. Básicamente porque la parte más débil militarmente (Perú) es la que reivindica el territorio en controversia, y la parte militarmente más poderosa (Chile) es quien lo controla. Salvo que el Perú decida desafiar por la fuerza el control chileno de ese territorio, Chile no tendría causa aparente para recurrir a ella. El único escenario en donde el poderío militar chileno tendría un papel verosímil sería uno en el cual la Corte de La Haya fallara a favor del Perú y Chile decidiera no acatar el fallo: en ese caso podría emplear la superioridad militar de la que dispone para mantener el control del espacio marítimo en controversia. Y aunque no sea del todo posible descartar ese escenario, tampoco parece particularmente probable. Si Chile creía probable una derrota en La Haya y no estaba dispuesto a aceptar ese desenlace, habría sido más sensato no participar del proceso que involucrarse en él, presentar una defensa y esperar varios años para desconocer un fallo adverso.

Por otro lado, los antecedentes de arbitrajes entre Argentina y Chile señalan que este último Estado aceptó una decisión adversa en una controversia limítrofe. Además, tenemos declaraciones expresas del jefe de la Marina chilena, almirante González, y del presidente de la República, Sebastián Piñera, señalando que su gobierno acatará el fallo. Y por último —y tal vez más importante precisamente porque la chilena es una economía abierta—, esta sería sumamente vulnerable ante la eventualidad de que se le aplicaran sanciones económicas internacionales, cosa que podría ocurrir si el Estado peruano sometiera el caso a la consideración del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

La pregunta es si el Consejo de Seguridad de la ONU adoptaría sanciones contra Chile en caso de un desacato ostensible de un fallo de la Corte de La Haya en torno a una controversia limítrofe. Probablemente sí: Chile no es tan importante para los Estados Unidos como, por ejemplo, Israel (Estado en favor del cual ha empleado la mayoría de sus vetos en el Consejo de Seguridad de la ONU).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Kenny, Charles (2010). Best Decade Ever. *Foreign Policy*. <http://www.foreignpolicy.com/>
- Pape, Robert (2010). It's the Occupation, Stupid! *Foreign Policy*, September/October. <http://www.foreignpolicy.com/>
- Zakaria, Fareed (2008). *The Post-American World*. Nueva York: Norton.